

SÁNCHEZ SUSARREY

El crimen organizado ha tenido la capacidad para resistir la ofensiva del gobierno de Calderón. Sus recursos, monetarios y de armamento, no han sido menguados.

Omisiones y errores

JAIME SÁNCHEZ SUSARREY

No fue un error. Hubo ausencia de cálculo. Felipe Calderón reaccionó a bote pronto: frente al narcotráfico hay que usar toda la fuerza del Estado. Fue, sin duda, una decisión valiente. Pero no se acompañó de un diagnóstico indispensable: a) ¿de dónde proviene la fuerza del narcotráfico?, b) ¿cuáles son los recursos reales del Estado para combatirlo?, c) ¿cómo evolucionará y se escalará el conflicto en el mediano y largo plazos?

Los cárteles de la droga cuentan con dos recursos esenciales: el primero y fundamental es monetario. La oficina antidrogas de Estados Unidos calcula que en el 2008 los narcotraficantes mexicanos, que ya controlan el mercado allá, obtuvieron más de 14 mil millones de dólares; a los que habría que sumar las ganancias que obtienen en México por la expansión del consumo de drogas y por otras actividades ilícitas como la extorsión y el secuestro.

El segundo recurso estratégico es el armamento. Según un reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, por la frontera sur cruzan 2 mil armas diarias, esto es, 730 mil al año. Incluye armamento sofisticado, como bazucas o lanzacohetes, para no hablar de los cuernos de chivo o de las granadas de fragmentación. Los narcotraficantes se pertrechan en el mercado más grande y menos regulado del mundo. Su capacidad de fuego es prácticamente ilimitada, ya que depende sólo de sus medios económicos —que son enormes.

Frente a esta realidad, cuáles son los recursos reales del Estado mexicano. Empecemos por las carencias. El 95 por ciento de los cuerpos policíacos son municipales y estatales. No están capacitados ni armados para enfrentar a los narcotraficantes.

Pero eso no es lo peor. Los gobernadores y los presidentes municipales se mantienen al margen del conflicto, que es de orden federal, por temor, prudencia o connivencia. Restan, entonces, las policías federales (PFP y AFI) para combatir a la delincuencia organizada.

En ese contexto el uso del Ejército se torna obligado e indispensable. Pero siendo el único y el último recurso del Estado debe usarse con prudencia. El solo hecho de ponerlo en la primera línea de fuego supone una serie de riesgos. Sin embargo, desde que el presidente Calderón decidió lanzar la ofensiva hasta la fecha, ni el gobierno de la República ni el Congreso de la Unión han delineado una estrategia para modernizar y crear un policía nacional que sea capaz de asumir la lucha contra el crimen organizado.

Estamos, por lo tanto, ante una guerra o enfrentamiento que se prolongará en el mediano y largo plazos. La omisión inicial se transformó ya en una gran irresponsabilidad. Felipe Calderón creyó que la ofensiva

contra los narcotraficantes arrojaría resultados inmediatos, como recobrar los territorios controlados por el crimen organizado, y que la correlación de fuerzas sería táctica y estratégicamente favorable al Ejército mexicano. Jamás imaginó que los cárteles tendrían la fuerza, capacidad de fuego y decisión de enfrentar y resistir la ofensiva de las Fuerzas Armadas.

Pero en esas estamos ya. La razón es doble. El Estado no ha logrado golpear al crimen organizado en sus dos pilares fundamentales. Los decomisos de droga, que ciertamente se han incrementado respecto de años anteriores, no representan gran cosa respecto del volumen total. Para confirmar lo que acabo de decir bastaría con hacer un ejercicio muy simple: medir la cantidad de droga incautada en el 2008 no en toneladas, sino en millones de dó-



Fecha 21.02.2009	Sección Primera - Opinión	Página 9
----------------------------	-------------------------------------	--------------------

lares y compararlos con los más de 14 mil millones de dólares que se obtuvieron en Estados Unidos.

La impotencia del Estado mexicano frente a la capacidad de fuego de los narcotraficantes es todavía más evidente. Es imposible controlar el contrabando de armas a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos. Es más, el flujo diario de personas y la corrupción hacen que el verdadero contrabando se realice por los puntos de cruce o por las propias aduanas mexicanas. Las cifras hablan por sí mismas. Entre 2007 y 2008 las autoridades mexicanas aseguraron 27 mil armas del millón 460 mil que –se estima– ingresaron a México.

El estribillo del gobierno de la República: “vamos ganando la guerra, el incremento de la violencia confirma que los cárteles están contra la pared”, resulta cada vez más absurdo. Todo apunta en sentido contrario. El conflicto se ha escalado. Ante la ofensiva del Estado, los cárteles no se han debilitado ni doblegado. Han incrementado su capacidad de fuego y están recurriendo a nuevas tácticas. La primera de ellas es aterrorizar a la población civil. Allí están las granadas que estallaron en Morelia el 15 de septiembre y las que posteriormente se han lanzado contra cuarteles de policía en centros urbanos.

La otra vertiente son los enfrentamientos y ejecuciones de soldados. El 21 de diciembre pasado fueron encontradas nueve cabezas en bolsas de plástico en una de las avenidas principales de Chilpancingo, Guerrero. Ocho de las víctimas eran militares, incluido un capitán. El asesina-

to del general Tello en Cancún, después de haber sido torturado, se inscribe en la misma lógica. Con un doble agravante: el general asesoraba al alcalde en materia de seguridad y fue victimado por integrantes de la policía municipal que están vinculados al narcotráfico. El mensaje no pudo ser más claro ni más sencillo: se enfrentará al Ejército a sangre y fuego sin importar rango ni función.

Pero la escalada no termina allí. Los cárteles de la droga actúan con mayor rapidez, ingenio y astucia que el gobierno de la República. Los pequeños, por ahora, mítines-motines exigiendo la salida del Ejército en diferentes ciudades confirman que el narcotráfico tiene una base social y que está en capacidad de movilizarla contra el Ejército y la policía. Pero además, esto no ocurre en algún municipio perdido en la Sierra Madre Occidental, sino en Monterrey y otras entidades de la frontera.

La base social del narcotráfico está en las zonas donde los campesinos cultivan marihuana. También en los municipios que controla el crimen organizado. Y ahora, sabemos, en las zonas marginadas urbanas donde tiene redes de distribución y puede reclutar a hombres y mujeres para participar en motines. La gravedad y complejidad del problema es enorme. Baste imaginar la combinación de mítines-motines con enfrentamientos violentos y actos terroristas a lo largo y ancho de toda la República. El riesgo está en que el Estado pierda la batalla o se vea obligado a negociar en condiciones de extrema debilidad. ¿Posibilidad de Estado fallido? ¡No, qué va!